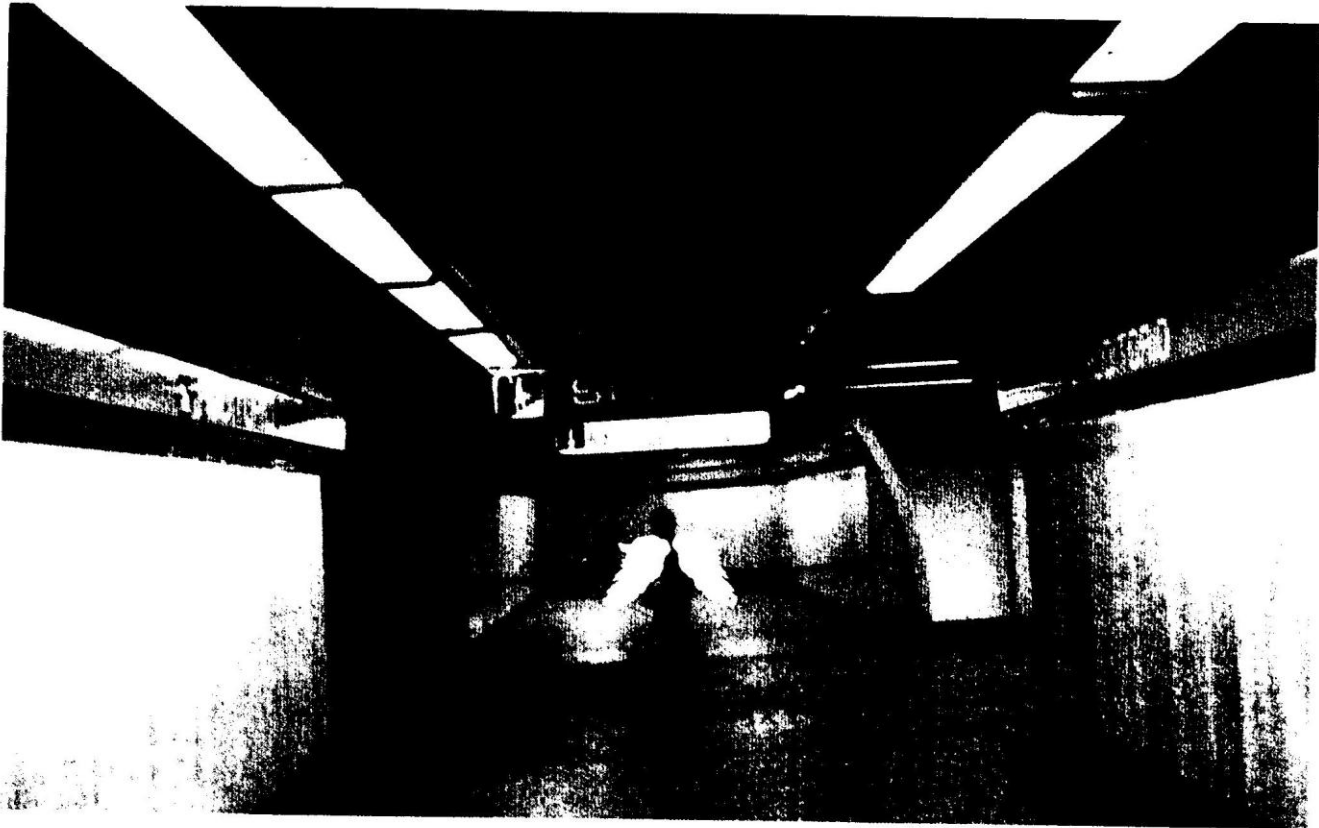


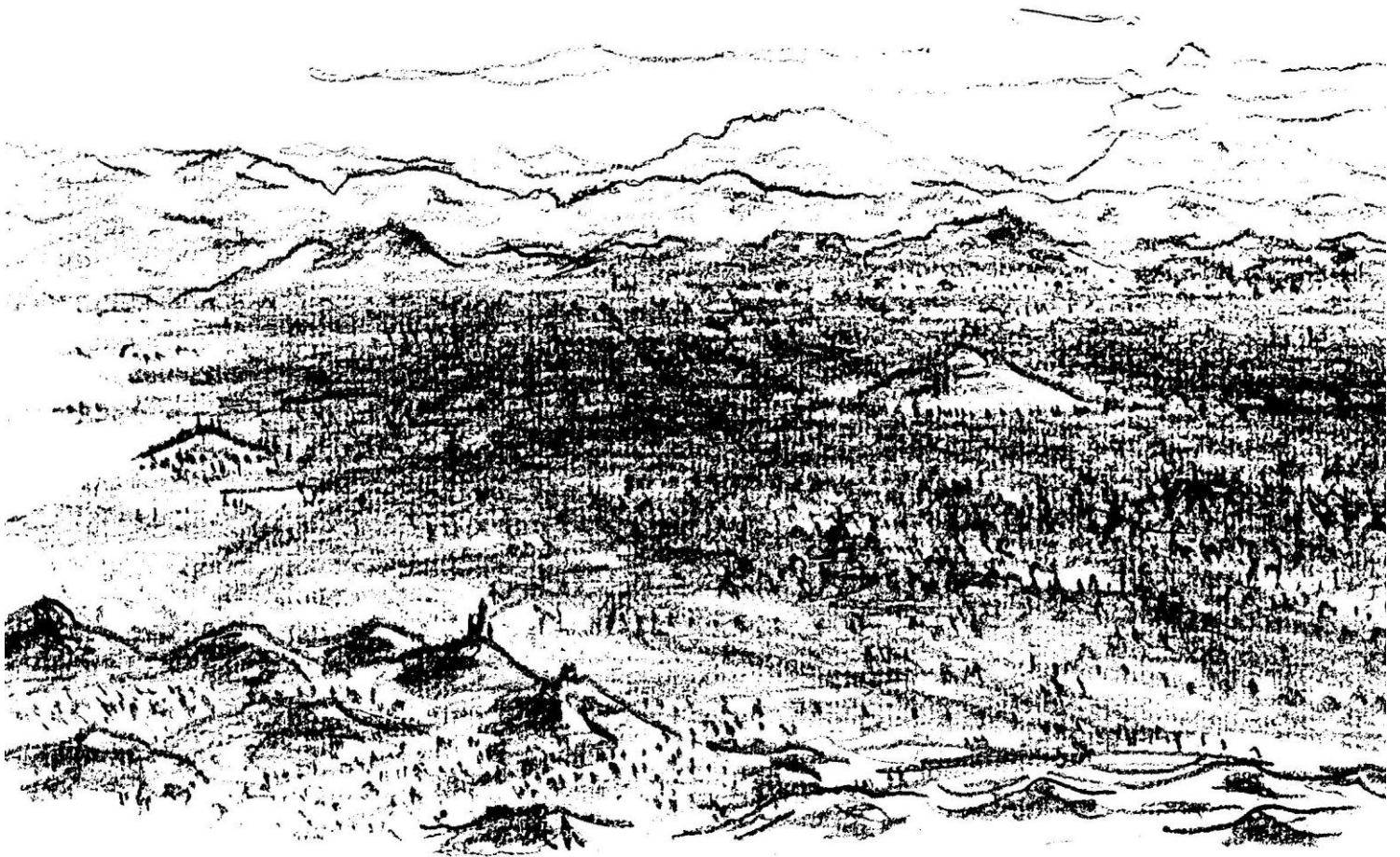
Economía y democracia en la Ciudad de México

Emilio Pradilla Cobos



EXTREMOS DEL AMBULANTAJE. IMAGEN: DRUMU DRECHIN

Hay dos aspectos nodales en el análisis de las tareas realizadas por el primer gobierno democrático de la Ciudad de México durante sus 20 meses de gestión: uno, la situación objetiva de la estructura económica urbana, como condición estructural heredada de 70 años de dominio político priista ejercido desde la presidencia de la república a través de los regentes designados, y de la aplicación salvaje de las políticas neoliberales durante 16 años; el otro, la naturaleza de las acciones que lleva a cabo el gobierno capitalino para cambiar dicha comisión y enfrentar los efectos de la crisis de larga duración iniciada en México en 1982.



Dibujo: HUGO MUÑOZ

Hay que recordar que el Gobierno del Distrito Federal (GDF), emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de oposición al Revolucionario Institucional que gobierna al país, carece de facultades legales para actuar sobre la política económica nacional; que su ámbito legal de gestión es sólo una parte de la unidad económica metropolitana; que ha sido limitado en su capacidad de inversión por el recorte presupuestal y el monto de endeudamiento para 1999 que le fue impuesto por la alianza PRI-PAN en la cámara de Diputados; y que solo ha gobernado un corto tiempo, insuficiente para modificar una estructura económica cristalizada, y darle sustentabilidad, equidad y capacidad de respuesta ante los ciclos recesivos coyunturales en medio de una crisis de larga duración.

UNA METRÓPOLIS POTENCIALMENTE COMPETITIVA

La Ciudad de México, Distrito Federal, con una población de 8.6 millones, es parte y núcleo de la concentración urbana más grande de América Latina y una de las mayores del mundo: la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que alberga a cerca de 18.8 millones de habitantes. A su vez, la ZMVM es el centro estructurador de un gran sistema urbano en formación, la Megalópolis del Centro de México (MCM), con 25.9 millones

de habitantes. En 1995, la ZMVM albergaba al 18.7 por ciento de la población nacional, y la MCM al 25.4. Mientras el DF disminuye su participación relativa en la población nacional, la ZMVM la mantiene y la MCM la incrementa al registrar una tasa de crecimiento anual promedio superior a la nacional. La población del DF, la ZMVM y la MCM continúa creciendo en números absolutos. La *megalopolización* aparece como la tendencia territorial presente y futura del centro del país.¹

La superficie urbanizada del DF es de 63 400 hectáreas y la de la ZMVM de 184 000 hectáreas, con índices de ocupación y densidad inmobiliaria y poblacional diversos, marcados por la dispersión y discontinuidad. Aunque ocurren procesos interiores de reutilización, reconstrucción y densificación inmobiliaria, prosigue la tendencia al crecimiento periférico o sobre los ejes carreteros, una de las fuerzas constitutivas de la *megalopolización*. Se observa un alto grado de fragmentación y segregación territorial y social, resultante de los patrones históricos de

1. E.P.C.: "Las megalópolis latinoamericanas en la globalización: la Zona Metropolitana de la Ciudad de México", ponencia para el seminario internacional Ciudades Abiertas, Ciudades Competitivas. Fundación Hábitat Colombia. 20-25 octubre de 1998, Santa Fe de Bogotá, Colombia.



configuración urbana, las políticas estatales y la debilidad de la planeación, características del patrón de acumulación del pasado, acentuadas por el neoliberalismo de los últimos dos decenios.

El DF participaba en 1993 con el 24.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, la ZMVM con el 34.6, y la ZMVM con el 42.9. La ZMVM es la mayor concentración económica urbana de México; el DF es sólo la parte más dinámica de este conglomerado. En el territorio metropolitano se asentaban en 1996 las sedes del 53.6 por ciento de las 500 mayores empresas del país, con el 67.2 por ciento de su capital, el 69.9 de sus ventas y el 66.7 del personal ocupado por ellas. Las grandes empresas han sido atraídas por la compleja aglomeración de consumidores, infraestructura y servicios, actividades industriales, comerciales y financieras, centros universitarios y de investigación y medios de transporte y comunicaciones, que constituye una poderosa ventaja competitiva comparativa para su inserción exitosa en el mercado regional y mundial. Junto con la megalópolis en formación en torno a Monterrey, la Zona Metropolitana de Guadalajara, las ciudades maquiladoras fronterizas y los corredores turísticos costeros de lujo, la ZMVM y la MCM forman parte de las regiones ganadoras potenciales en la globalización. Pero en los dos últimos decenios, como efecto de las crisis económicas recurrentes, la deslocalización indus-

trial y —en el último quinquenio—, la desigual competencia en el libre mercado norteamericano, la metrópoli perdió en parte sus condiciones de competitividad económica.

LA ECONOMÍA METROPOLITANA PERDIÓ VIABILIDAD

La población de la Zona Metropolitana del Valle de México puede llegar en el año 2010 a los 22.5 millones de personas, lo que significa 3.7 millones más que en la actualidad. Ello obligará a responder a sus demandas de infraestructura y servicios, vivienda, abasto, educación, salud, recreación, cultura y, sobre todo, empleo e ingresos. Lograrlo implica, entre otras cosas, tener una economía metropolitana estructuralmente sana, con crecimiento sostenido y equidad distributiva para que sus beneficios lleguen a toda la población. La crisis permanente desde 1982 y las políticas neoliberales salvajes aplicadas por los tres últimos gobiernos federales priistas, han deformado la estructura económica urbana y minado las condiciones para lograr la viabilidad económica de la metrópolis.

El complejo económico formado por el Distrito Federal y el Estado de México —cuyos municipios económicamente más importantes están conurbados— perdió entre 1980 y 1996 un

2.74 por ciento de su participación en el PIB nacional, a causa de tasas de crecimiento menores que la nacional (2.07 por ciento anual promedio en el país, 1.50 en el DF y 1.73 en el Edomex). El sector manufacturero de la ZMVM sufrió una pérdida mucho mayor, del 10.47 por ciento, más grave en el DF, que perdió un 9.19 por ciento de su participación; esta evidente desindustrialización se debe a tasas de crecimiento anual promedio negativas en el DF (-0.34 por ciento), o menores que la nacional en el Edomex (1.50 contra 2.0 por ciento).

La gran industria, privilegiada por la política económica neoliberal, se mantuvo, modernizó y volcó a la exportación: pero varios miles de micro, pequeñas y medianas empresas quebraron a causa de la reducción de la demanda interna, la competencia desigual en el “libre” mercado, la dificultad para cambiar tecnológicamente, las altas tasas de interés la usura de la banca,

comerciales y supermercados, y una popular con gran participación de comercio callejero, tianguis y otras formas, atrasadas. El terciario moderno, formado por servicios financieros y bancarios, ha crecido pero en una pequeña porción; el mayor crecimiento ocurre en los servicios sociales y personales, con cerca de un tercio de la actividad económica urbana, y oculta a gran parte del trabajo doméstico, informal e ilegal.

Al tiempo que la economía metropolitana pierde competitividad en los mercados nacional e internacional, se polariza entre un reducido sector “moderno” abierto, elitizado, que genera poco empleo bien remunerado y estable; y otro popular, atrasado, que produce mucho empleo pero inestable y muy mal pagado. Como muestra de ello, en 1996 en el DF, el 41.83 por ciento del personal ocupado se encontraba en el sector informal, y más del 45 por ciento del empleo se generaba en este mismo sector. Como telón de fondo, el salario local, siguiendo al nacional, ha perdido cerca de un 70 por ciento de su capacidad de compra, contrayendo el mercado interno y polarizándolo aún más en sus esferas alta, restringida y de alto consumo, y baja, amplia y sin capacidad adquisitiva.

La conclusión es dramática: las políticas neoliberales aplicadas por el PRI, con apoyo del PAN, llevan a la economía metropolitana hacia la pérdida de competitividad, la degradación de las condiciones materiales y sociales de la productividad y, ante al crecimiento de la población, a la no sustentabilidad económica, fuente de pobreza y caldo de cultivo de la inseguridad y el crimen.

LOS FACTORES NEGATIVOS PARA LA PRODUCTIVIDAD URBANA

La pobreza y la exclusión social, agravadas por el patrón neoliberal de acumulación de capital, son factores negativos para la productividad urbana. Las fluctuaciones bruscas de la economía desde los años 80 (recesiones de 1982-1983, 1986, 1993, 1995 y la desaceleración en curso), que han dado como resultado el estancamiento en el largo periodo, y la modernización tecnológica, frente a la evolución demográfica, han causado un incremento notorio del desempleo abierto o encubierto. El desempleo y la caída en un 70 por ciento de la capacidad adquisitiva real del salario, resultante de 24 años de política de austeridad salarial, han ocasionado la contracción del mercado interno y la creciente informalización de la economía urbana, y han creado condiciones propicias para el aumento de la delincuencia organizada y la violencia.

Factores tales como el peso específico del servicio de la deuda externa, las crisis económicas y financieras, la canalización masiva de fondos públicos hacia el rescate de los sectores bancario (Fobaproa e IPAB) y carretero privado ineficientes, la crisis fiscal derivada de la caída de los precios del petróleo y otras materias primas, la privatización indiscriminada de servicios sociales y el paulatino abandono de la responsabilidad social del Estado, han

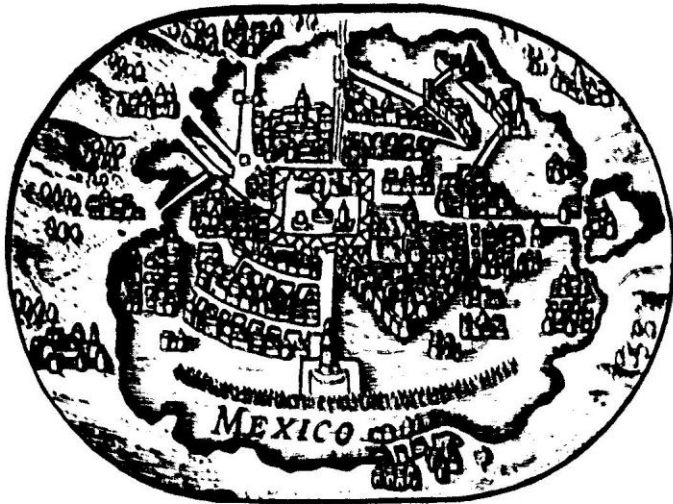


IMAGEN TOMADA DE FERNANDO BENÍTEZ: *HISTORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO*, SALVAT, MÉXICO, 1984. T. III, P. 64. (ARCHIVO SALVAT)

y la falta de apoyo estatal; al mismo tiempo, las cadenas productivas se desarticularon. La construcción, muy dependiente de los ciclos económicos globales, que se orientó hacia el sector moderno (oficinas, turismo y comercio de lujo) y la vivienda para la población de altos ingresos, tiene un carácter abiertamente especulativo y muestra signos de sobreoferta y saturación del mercado. La severa afectación de la actividad agropecuaria y forestal tradicional de la periferia metropolitana, atrasada y de baja rentabilidad, facilita la urbanización rápida y la destrucción de reservas naturales indispensables para el equilibrio ecológico.

Esta desindustrialización modificó la estructura económica urbana, que tiende a especializarse en actividades terciarias, de finanzas, comercio, turismo y servicios superiores, en detrimento de la heterogeneidad que le ha permitido resistir mejor que otras ciudades los embates de las crisis. Algunos analistas califican como “positivo” este proceso de terciarización de la economía metropolitana, que mostraría su “modernización”; se trata de un espejismo. El comercio ha sufrido una contracción importante y se polariza entre una franja de élite formada por centros

reducido notoriamente el gasto público social federal, lo que limita y deteriora la atención a las necesidades básicas de la población mayoritaria en el país y la metrópolis: educación, salud y alimentación. El sector inmobiliario privado, convertido por los neoliberales en el eje de la atención a la demanda, no ha respondido a la creciente necesidad de vivienda de los sectores populares; las reglas de operación del crédito hipotecario impiden que el sector no asalariado y una parte importante de los trabajadores sean sus sujetos de crédito; los gobiernos del DF y los municipios conurbados carecen de los recursos fiscales suficientes para atenderla; y la crisis financiera de 1995, sumada al “anatocismo” —usura— bancario, dejaron a cientos de miles de deudores hipotecarios en la insolvencia, y limitaron aún más el acceso de los pobres a los bienes inmobiliarios.

Los programas federales de combate a la pobreza extrema como Pronasol y Progresá, sustituyeron la garantía pública de los derechos humanos y sociales universales, son asistencialistas e insuficientes, no atacan sus causas estructurales sino sus manifestaciones fenomenológicas, y han sido manejados como instrumentos del clientelismo político. En 1999, el DF fue excluido por el PRI y el PAN de los aportes federales para atender la lucha contra la pobreza. El resultado ha sido un mayor empobrecimiento de la población; en la ZMVM, el 57.2 por ciento de los hogares es pobre, mientras el 35.9 está en la pobreza extrema.

La educación, la salud, la alimentación y la vivienda de los trabajadores son condiciones necesarias de la productividad y la competitividad interna e internacional; el agudo deterioro social observado en años recientes entra en contradicción con las ventajas comparativas de la metrópoli. La precaria situación social crea factores estructurales de ingobernabilidad, latentes en la ciudad: el desempleo y la pobreza dan lugar a una masa de población proclive a la delincuencia, que se vuelve “carne de cañón” del crimen organizado local, nacional e internacional. Son fenómenos negativos para la vida cotidiana de los ciudadanos, que reducen la seguridad de la inversión y la actividad económica y social en general. La informalización creciente del empleo y la actividad económica, afectan las finanzas gubernamentales, incluyendo las locales, y su despliegue en los espacios públicos dificulta el funcionamiento urbano.

La carencia de satisfactores esenciales aviva las demandas y la protesta social que tienen su escenario en las calles, ante la

falta de espacios institucionales adecuados de negociación entre gobierno y gobernados en el viejo régimen político mexicano. El tradicional manejo corporativo y clientelar de las organizaciones sociales por parte del régimen a nivel nacional y local, convierte los problemas urbanos en factores adicionales de conflicto que agudizan la descomposición del sistema político. Esta es la herencia que nos dejó la administración local del Partido Revolucionario Institucional y que sigue siendo alimentada por las políticas y acciones del gobierno federal actual. Por ello, se hace impostergable el tránsito hacia una democracia política y económica real y plena en el país.²

En el centralista sistema político mexicano, las decisiones sobre política económica y social son potestades del gobierno federal, dominado durante 70 años por el PRI. Los fragmentados gobiernos locales del DF y los municipios que junto con él constituyen la metrópolis, carecen de instrumentos adecuados en estos campos, aunque resienten localmente las consecuencias de su manejo, así como las presiones sobre los servicios locales, derivadas de la migración y los flujos cotidianos de población flotante; más de tres millones de personas provenientes del Estado de México y otros estados de la región centro del país, llegan diariamente al DF a trabajar, comprar, educarse, sanarse o divertirse y consumen sus servicios, sin que tributen a las finanzas locales.

El gobierno del DF, cuyo ámbito de gestión es sólo una parte de la unidad económica metropolitana, carece de facultades e instrumentos para resolver esta herencia del PRI, en el corto tiempo de tres años. El bienestar de los habitantes de la ZMVM exige el abandono del ineficiente modelo económico neoliberal; está en juego su sobrevivencia.

LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO DEMOCRÁTICO

El primer gobierno democrático de la Ciudad de México elegido por voto popular, tomó posesión en diciembre de 1997, hace sólo 20 meses. Su difícil tarea podría resumirse en: a) reconstruir

2. Cuauhtémoc Cárdenas: “Nuestra apuesta es a la ley, a la integración y a la paz” (intervención en el Foro Económico Mundial, Davos, Suiza), en *Bitácora*, no. 34. México, 31 de enero de 1999.



DIBUJO: HUGO MUÑOZ

la administración pública, hasta entonces dependiente del presidente de la república, y poner orden en ella, combatiendo la tradicional corrupción burocrática; b) construir una forma democrática de gobernar la ciudad, abriendo ámbitos a la participación ciudadana y formas de concertación con los diferentes sectores sociales; c) promover la reconstrucción del mercado interno local y del tejido económico urbano destruido por la crisis y las políticas gubernamentales federales; d) crear las condiciones institucionales para aumentar y orientar productivamente la inversión privada, conciliando su interés con el de la colectividad urbana; e) recuperar la responsabilidad social del Estado local y promover formas de participación autogestionaria y del sector privado en la atención de las necesidades básicas de la población mayoritaria; f) establecer un equilibrio entre los espacios públicos apropiados por todos, preservando y mejorando los existentes, y los espacios semiprivados y privados de interés colectivo; g) mejorar las condiciones materiales de la calidad de vida de toda la población para aumentar la productividad y la competitividad urbanas; h) combatir al mismo tiempo las causas estructurales, económicas y sociales, y los efectos de la corrupción y la inseguridad, para enfrentar adecuadamente la delincuencia urbana; i) promover la participación amplia y plural de todos los sectores ciudadanos en el cumplimiento de estas tareas.³

El gobierno de la Ciudad de México ha sido consciente de sus limitantes. Sólo gobernará tres años, apenas suficientes para sentar las bases de un cambio de rumbo, pero escasos para su operación y consolidación. Este tiempo está marcado por el debate político rumbo a las elecciones federales y locales del año 2000, lo que exacerba la acción de los partidos de oposición en la capital (PRI y PAN), muestra de lo cual son los significativos recortes al presupuesto de la ciudad en 1999, que votaron en el congreso federal, y otras prácticas de hostigamiento y bloqueo. La reforma política para el Distrito Federal es insuficiente e inconclusa y está en manos de dicho congreso, donde dominan fuerzas políticas contrarias a la que gobierna la ciudad, las cuales no quieren concluirla. Su ámbito de gestión es sólo la mitad de la metrópoli y no existen mecanismos suficientes y eficientes de coordinación de las políticas con los municipios conurbados de la entidad federal vecina, gobernada por el PRI. La política económica y social que se aplica en la capital, gobernada hasta 1997 desde la presidencia de la república, es en gran parte función del Ejecutivo federal y no de la jefatura de gobierno local, lo que fija ámbitos restringidos a la aplicación de los esquemas alternativos que ésta última desea impulsar.

La economía, la política y la gobernabilidad están íntimamente relacionadas y condicionadas. La gobernabilidad democrática tiene como requisitos el cambio de la forma de gobernar y el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población. La competitividad y productividad urbanas, bases de un crecimiento económico sostenido, dependen del mejoramiento de la atención pública a las necesidades sociales y el abatimiento estructural de la pobreza, que no han asegurado ni la empresa privada ni el libre mercado. Para orientar productivamente la inversión pública y privada hay que erradicar la corrupción y la violencia, quitarles su soporte económico y social, para lo cual se requieren acuerdos políticos que permitan el acceso a recursos presupuestales suficientes y faciliten los consensos de coordinación metropolitana.

El gobierno de la Ciudad de México ha buscado actuar sobre la compleja trama de relaciones que sustentan la productividad y eficiencia urbanas, cimientos de la competitividad.⁴ La política económica se orienta a mantener la heterogeneidad y complejidad de la estructura económica urbana, la cual no excluye cierto grado de especialización en términos de ventajas comparativas, pero busca la complementariedad. La recuperación del mercado interno, que no se opone al esfuerzo exportador, que lo soporta y complementa, tiene que basarse en el incremento del empleo estable, la reversión de la caída tendencial de los salanos reales y la paulatina absorción y/o regularización del sector informal. Mediante cambios organizativos y tecnológicos ambientalmente sustentables, se busca la elevación de la productividad del sector agropecuario y forestal periférico, orientado a la vez al abasto local y a la exportación, lo que ayudará a controlar la expansión urbana desordenada y extensiva, mejorará las condiciones de vida de los sectores rurales urbanizados y preservará su identidad, muy arraigada en los pueblos rurales integrados a la ciudad. Para lograrlo, se combinan la planeación territorial; la lucha contra la contaminación del suelo y el agua rurales; el mejoramiento ambiental; la promoción financiera, comercial, tecnológica y organizativa de las comunidades, ejidos y pequeñas propiedades, con la colaboración del sector público y los centros universitarios de investigación; y el desarrollo y la modernización de las redes de comercialización urbana, desestimulando la acción de intermediarios innecesarios e ineficientes, que merman el beneficio de los productores y elevan el costo para los consumidores. Se trata de construir una agricultura suburbana productiva, eficiente y rentable.

En el marco de esta política, anteponiendo el interés de todos los habitantes de la Ciudad de México y las comunidades agrarias locales al de los inversionistas privados, fue tomada la decisión de rechazar el proyecto inmobiliario de la llamada

3. Cuauhtémoc Cárdenas: *Una ciudad para todos. Otra forma de gobierno*, Fundación para la Democracia. México, 1997; Gobierno del Distrito Federal: *Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 1998-2000*, Corporación Mexicana de Impresión. México, junio de 1998.

4. Cuauhtémoc Cárdenas: o. c. en nota 3 y *Primer Informe de Gobierno* (dos tomos), s/e; México, 17 de septiembre de 1998. GDF: o. c. en nota 3.

comunidad ecológica Santa Cecilia, ubicada en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa en Xochimilco, que en realidad consistía en la construcción de clubes de golf, centros de convenciones y hoteles de gran turismo, viviendas de lujo y lugares de recreación de élite. Su impacto hubiera consistido en la generación de fuerzas de atracción para la urbanización periférica, saturación de los sistemas de vialidad microregional, agudización de la escasez de agua en la zona, desplazamiento del campesinado y destrucción de la actividad agropecuaria, sustitución de la fuerza de trabajo local, deterioro ambiental y destrucción de la identidad local.



...LA BUSCARÍA POR HIDALGO Y PANTITLÁN. IMAGEN: BRUNO BRESANI

Torre Chapultepec, el Conjunto Cuicuilco, el Proyecto Alameda, el Conjunto Santa Fe, etc., creadores de empleo que adecúan a la ciudad a las necesidades del crecimiento económico.

De simple receptor y regulador de proyectos privados, el gobierno local transita hacia el papel de promotor, concertador y facilitador de proyectos de interés para toda la ciudad y sus habitantes. Se desarrollan nuevos esquemas de acceso de los sectores populares empobrecidos a la vivienda, adecuados a su situación económica real, que combinen recursos públicos, empresariales y familiares; y se insiste en la revisión a fondo de la política federal de vivienda social y las normas bancarias relacionadas.

Se busca conservar y ampliar la base productiva industrial a escala de la metrópoli y del sistema urbano central del país. Por ello, se apoya la reconstrucción de la micro, pequeña y mediana empresa, creadora de mayor empleo, su transformación organizativa y tecnológica y la integración horizontal y vertical. La focalización de este apoyo en áreas urbanizadas periféricas pobres, permitirá en el futuro reducir la presión sobre el sistema de transporte, al retener localmente el empleo y actuar estructuralmente sobre sus índices de marginación. La necesaria deslocalización regulada de las grandes empresas contaminantes hacia otros lugares más adecuados en el sistema megalopolitano, puede compensarse con la localización de nueva industria de alta tecnología, no contaminante ni consumidora de grandes cantidades de recursos naturales escasos (suelo, agua, energía, etc.) o por empresas de subcontratación internacional y ensamble de objetos de alto valor agregado. Para ello, se busca concertar su desarrollo en el ámbito articulado de la metrópolis y la megalópolis del centro.

Se promueve la reutilización y densificación de las áreas urbanizadas interiores dotadas de infraestructura, en lugar del crecimiento extensivo depredador de la naturaleza y de alto costo colectivo. Se insiste ante la empresa privada en que los grandes proyectos inmobiliarios cubran sus costos públicos, atiendan el impacto urbano y ecológico que crean, beneficien directamente a los usuarios y residentes de sus áreas de influencia y cuenten con su consenso mediante procesos de información y participación. En este marco, aplicando estrictamente la legislación pero renegociando sus condiciones, ha continuado la construcción de grandes proyectos inmobiliarios como la

El desarrollo del turismo, de gran importancia en la capital, supone en esta política su difusión a las capas medias y bajas, nacionales y extranjeras, mediante el impulso a nuevas formas de atención hotelera y de servicios de bajo costo, que requieren menos capital que el gran turismo, y son más adecuadas para la conservación de la trama urbana patrimonial, que es uno de los valores que consume. Este criterio se aplica en la promoción de la recuperación del Centro Histórico de la ciudad, uno de los proyectos prioritarios del gobierno, del área lacustre de Xochimilco —patrimonios de la humanidad— y de otras áreas urbanas significativas. Los mismos criterios pueden aplicarse en la ampliación de la oferta recreativa para la población local, mediante la planeación y regulación rigurosa del uso de zonas de reserva ecológica insustituibles.

La informalidad callejera, producto del desempleo y el empobrecimiento generalizados y que ha servido como medio de subsistencia de millones de personas, es lícita pero problemática en la medida que evade la fiscalidad, impide la libre circulación de personas y vehículos y se articuló con el contrabando y la delincuencia. El gobierno respeta el derecho al trabajo pero aplica la legislación que lo prohíbe en áreas específicas, y busca que los informales se integren paulatinamente al funcionamiento normal de la ciudad y combate con estricto apego al derecho sus irregularidades. Así, enfrentando la resistencia de las organizaciones corporativizadas al PRI, se han ido liberando del ambulante zonas y calles prioritarias y se están creando lugares acondicionados para el desarrollo ordenado de esta actividad comercial.

Se busca que las grandes obras hidráulicas y de transporte indispensables para el funcionamiento de la metrópoli, como la provisión de agua (Acuaférico), el drenaje profundo y el metro (Línea B y Ecotren), afectadas seriamente por el reciente recorte presupuestal, satisfagan las necesidades de todos los actores sociales, en todos los ámbitos territoriales, sobre todo de aquellos que hasta ahora han sido excluidos. Este énfasis de la política pública hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente empobrecida y excluida, en sus asentamientos humanos, se aplica sin eliminar la garantía de acceso a los demás sectores sociales. Salud, saneamiento y cultura para todos, y atención a los sectores sociales de alto riesgo (niños de la calle, ancianos, discapacitados) son parte del esfuerzo gubernamental de mejorar las condiciones sociales de la productividad urbana; el apoyo a la educación en general se ve limitado porque el sector aún depende del gobierno federal.

Es un compromiso democrático del gobierno de la ciudad la lucha frontal contra la corrupción en la administración —legada por el gobierno anterior— introduciendo prácticas eficientes, transparentes y rigurosas de ejercicio presupuestal, así como de ampliación de la base tributaria y eficacia en la recaudación. Como medio para superar la discrecionalidad y discontinuidad de la política pública, se abren espacios y procesos de planeación estratégica de mediano y largo plazo, integrada, integradora y participativa, que privilegie el interés de la colectividad urbana y su desarrollo.

Una contradicción de gran importancia surge del hecho de que la política económica nacional y su aplicación a nivel local hasta 1997, o actualmente en la parte metropolitana del Estado de México, genera constantemente desempleo y pobreza que alimentan la delincuencia. La corrupción de los cuerpos policíacos y del aparato de justicia, heredada por el PRI al gobierno democrático del DF, mantienen la impunidad y facilitan la acción del crimen organizado. El combate a la inseguridad consume una masa creciente de los recortados recursos públicos, que deberían dedicarse a la promoción del crecimiento económico, la equidad distributiva y el mejoramiento social, para reducir las causas originarias de la delincuencia. Se trata de un círculo perverso que sólo puede romperse a partir de un acuerdo político nacional.

La competitividad urbana no se garantiza mediante las buenas cifras de negocios de un puñado de grandes empresas monopólicas nacionales y extranjeras que producen básicamente para la exportación; sólo puede alcanzarse cuando la mayor parte de la población se vincula al esfuerzo productivo como productor y consumidor. Se requiere elevar la productividad social, cuya condición es el creciente bienestar de productores, trabajadores, usuarios y consumidores. La búsqueda de la competitividad no puede reducirse a rentabilizar, mediante acciones de *marketing* o megaproyectos espectaculares, algunos fragmentos privilegiados de la ciudad; requiere de la integración incluyente de todas sus partes y actores.

LOS PRIMEROS RESULTADOS POSITIVOS

La política económica y social del gobierno democrático del DF está pensada en el mediano y largo plazo, por lo que requiere de continuidad en el próximo periodo gubernamental local y de que las fuerzas democráticas logren, a través del triunfo en las elecciones presidenciales y legislativas del 2000, cambiar la política económica neoliberal nacional. Sin embargo, y a pesar del corto tiempo de aplicación, ya ha empezado a rendir frutos sobre la economía local.

Mientras que la economía nacional se desacelera y pierde dinamismo, sin lograr sanear una base financiera que soporte el crecimiento a pesar del gigantesco sacrificio fiscal que representa para todos los mexicanos el rescate bancario, plagado de ilícitos y corruptelas, la economía del Distrito Federal recupera sus condiciones de crecimiento. Si en 1999 se calcula en 3.3 por ciento el crecimiento del PIB local, muy superior al crecimiento poblacional, en el 2000 podría llegar al 4.2 por ciento.⁵ Además, un estudio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el conocido Tec, señala que, entre 1997 y 1999, el Distrito Federal ascendió del séptimo al sexto lugar en la escala nacional de competitividad, por estados. Es significativo que el DF se coloque en el tercer lugar nacional en administración de recursos públicos, lo que validaría la gestión del gobierno democrático.⁶

Es evidente que esto no basta, que es necesario un esfuerzo mucho mayor, sostenido y de largo plazo, para garantizar a los capitalinos de hoy y de mañana un crecimiento económico sostenido, con equidad distributiva y ambientalmente sustentable, que les permita el acceso a las condiciones materiales y sociales de vida propias del próximo siglo. Creemos que son las fuerzas democráticas de las que emana el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, las que pueden garantizarlo. ▼

BIBLIOGRAFÍA

Departamento del Distrito Federal: *Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Versión 1996*, s/e. México, 1996.

Fideicomiso Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México: *Ciudad de México 2010. Plan de trabajo*. México, 1999. Inédito.

Gobierno del Estado de México-Departamento del Distrito Federal-Secretaría de Desarrollo Social: *Programa de ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México*, s/e. México, 1997.

5. *Reforma*. México, 6 de julio de 1999.

6. *id.*, 29 de julio de 1999.